



**Asamblea General
Consejo de Seguridad**

Distr.
GENERAL

A/53/767
S/1998/1214
23 de diciembre de 1998
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

ASAMBLEA GENERAL
Quincuagésimo tercer período de sesiones
Temas 20, 105 y 110 del programa
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LA
ASISTENCIA HUMANITARIA DE LAS NACIONES
UNIDAS Y DE SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE,
INCLUIDA LA ASISTENCIA ECONÓMICA ESPECIAL
INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, CUESTIONES
RELACIONADAS CON LOS REFUGIADOS, LOS
REPATRIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS Y
CUESTIONES HUMANITARIAS
CUESTIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS

CONSEJO DE SEGURIDAD
Quincuagésimo tercer año

Carta de fecha 21 de diciembre de 1998 dirigida al
Secretario General por el Representante Permanente
de Eritrea ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de adjuntar parte del informe independiente titulado "Informe Mundial de Human Rights Watch de 1999" (véase el anexo), que se publicó a principios de este mes. En el informe se da cuenta de las violaciones patentes de los derechos humanos de los eritreos y etíopes de origen eritreo residentes en Etiopía cometidas por el régimen de Addis Abeba. Mi Gobierno considera que esos actos inhumanos merecen la reacción inmediata de la comunidad internacional.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con los temas 20, 105 y 110 del programa, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Haile MENKERIOS
Embajador
Representante Permanente

ANEXO

Informe mundial de Human Rights Watch de 1999

sobre lo acontecido entre diciembre de 1997 y noviembre de 1998
Nueva York · Washington · Londres · Bruselas

ETIOPÍA

Evolución de la situación de los derechos humanos

La estrecha alianza política y estratégica entre Etiopía y Eritrea terminó bruscamente a comienzos de mayo cuando un litigio fronterizo de menor cuantía desembocó en breves enfrentamientos violentos. Hubo centenares de muertos en ambos bandos, en su mayor parte civiles. Los combates, que causaron el desplazamiento de miles de personas en uno y otro lado de la frontera, cesaron a mediados de junio después de una intensa mediación, pero los dos Estados siguieron concentrando ingentes recursos bélicos mientras una feroz guerra de propaganda y la radicalización de los extremistas en los dos bandos reducían las posibilidades de una solución negociada.

Ambas partes se acusaron mutuamente de maltratar a los ciudadanos a quienes el conflicto había sorprendido en el lado equivocado de la frontera. Eritrea negó haber expulsado premeditadamente a etíopes y dijo que mantendría su política de acoger y proteger a los etíopes que quisieran quedarse en su territorio. Sin embargo, según declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Eritrea el 26 de septiembre, eran 6.600 los etíopes que habían "regresado voluntariamente" a Etiopía.

Hay pruebas manifiestas de que las autoridades etíopes han realizado una campaña de expulsión a Eritrea de eritreos y de etíopes de origen eritreo. Se calcula que a finales de octubre 30.000 personas, en su mayoría ciudadanos etíopes que no habían adquirido la nacionalidad de Eritrea después de la separación de ese país de Etiopía en 1991, fueron deportadas después de sufrir continuas violaciones de sus derechos humanos. La campaña pasó rápidamente de las deportaciones selectivas a las deportaciones indiscriminadas. Según una declaración de principios publicada por el Gobierno de Etiopía el 11 de junio, los "550.000 eritreos residentes en Etiopía" podían seguir viviendo y trabajando pacíficamente en ese país. Sin embargo, como "medida preventiva", se ordenaba a los miembros de las organizaciones políticas y comunitarias eritreas que abandonaran Etiopía porque se sospechaba que apoyaban a Eritrea en la guerra contra Etiopía, y se imponía una licencia sin sueldo de un mes a los eritreos que ocupaban puestos "delicados". Aunque las autoridades dieron a entender en un principio que la salida de Etiopía de esas personas era voluntaria, más tarde empezaron a detener a personas por el solo hecho de ser eritreas o de origen eritreo, sin que al parecer hicieran esfuerzo alguno por distinguir entre estas dos últimas categorías. No todos los detenidos fueron deportados. Los detenidos en edad de reclutamiento fueron enviados a campamentos de detención donde, a finales de octubre, un número indeterminado de ellos seguían retenidos sin haber sido acusados ni juzgados. Otras personas estuvieron detenidas por poco tiempo y luego fueron transportadas en camiones hasta puestos fronterizos aislados desde donde se las obligó a pasar a Eritrea a pie. Entre los detenidos

y expulsados había numerosos jubilados etíopes, principalmente comerciantes que habían vivido la mayor parte de sus vidas en otras provincias de Etiopía y criado en ellas a sus hijos mientras Eritrea luchaba por su independencia. El Gobierno de Etiopía ordenó el bloqueo de sus capitales y revocó sus permisos para comerciar, privando así de sustento a esas personas y sus familiares. Muchas familias quedaron separadas con las deportaciones al impedirse la salida de los hijos menores de edad o, en algunos casos, al ser deportados menores no acompañados.

En una entrevista en Radio Etiopía el 9 de julio, el Primer Ministro Meles Zenawi dijo que los deportados eran "extranjeros" y que "... todo extranjero, sea eritreo, japonés, etc. ... vive en Eritrea gracias a la buena voluntad del Gobierno etíope. Si el Gobierno etíope dice 'váyanse porque no nos agrada el color de sus ojos', deben irse". Sin embargo, las cosas no son tan simples como las presenta el Primer Ministro. En los 40 años anteriores a la independencia de Eritrea, obtenida en 1991, los dos países habían sido parte del mismo Estado internacionalmente reconocido. Hay fuertes lazos culturales, religiosos y lingüísticos entre los dos pueblos, y ha habido muchos matrimonios mixtos. En el artículo 6 de la Constitución de Etiopía se reconoce la nacionalidad etíope por nacimiento a los nacidos de padre o madre etíope. Muchos eritreos habían mantenido su nacionalidad etíope cuando Eritrea consiguió la independencia, y Etiopía no tomó ninguna medida legal para privarles de su nacionalidad en aquel entonces. En consecuencia, el Gobierno de Etiopía no puede sostener jurídicamente la condición de extranjeros de muchos de los deportados. Las redadas, la detención y malos tratos que sufrieron los deportados, ya fueran nacionales o extranjeros, es incompatible con los derechos de no discriminación y libertad de circulación que la Constitución de Etiopía reconoce. Las deportaciones y la vulneración simultánea de diversos derechos de los deportados son contrarias también a las obligaciones contraídas por Etiopía en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados de derechos humanos que ese país ha ratificado e incorporado a su derecho interno.

Defensa de los derechos humanos

Ocho miembros de la Junta Directiva de la Liga de Derechos Humanos (Human Rights League) permanecían en prisión en octubre de 1997, un año después de ser detenidos, acusados de conspiración armada con el Frente de Liberación Oromo (Oromo Liberation Front). El 8 de abril de 1998, agentes de seguridad irrumpieron en las oficinas de la Liga, se llevaron su material de oficina y sus archivos y precintaron sus locales. La Liga se creó en diciembre de 1996 en Addis Abeba por miembros de la comunidad oromo, pero el Gobierno se negó a inscribirla a pesar de que la Constitución reconocía el derecho de asociación. El Consejo de Derechos Humanos (Human Rights Council), organización más antigua, siguió funcionando sin ningún reconocimiento oficial y sin que se atendieran sus solicitudes reiteradas de mayor respeto a los derechos humanos. Otros grupos de observación, como el Comité de Derechos Humanos de Ogadén (Ogaden Human Rights Committee), los ex presidiarios oromos pro derechos humanos (Oromo Ex-Prisoners for Human Rights) y el Comité de Solidaridad con los presos políticos etíopes (Solidarity Committee for Ethiopian Political Prisoners), tuvieron que actuar clandestinamente o exiliarse, y sólo pudieron publicar sus críticas en el extranjero, recurriendo cada vez más a la Internet. El Gobierno autorizó las

actividades de varios grupos cívicos y de educación en materia de derechos humanos.

El Consejo de Representantes Populares organizó una conferencia internacional de derechos humanos sobre el establecimiento de una comisión de derechos humanos y oficina del Defensor del Pueblo que se celebró en mayo en Addis Abeba con el patrocinio de donantes internacionales. Ausentes notables fueron el Consejo de Derechos Humanos (Human Rights Council) de Etiopía, la Liga de Derechos Humanos (Human Rights League) y la prensa no estatal, que no fue invitada.

El papel de la comunidad internacional

Las Naciones Unidas

En una resolución aprobada por unanimidad el 26 de junio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió el fin inmediato del conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea e instó a ambas partes a cooperar con la Organización de la Unidad Africana (OUA) en sus gestiones de mediación. En esa resolución se estableció además un fondo fiduciario en apoyo de posibles misiones técnicas de las Naciones Unidas encargadas de demarcar la frontera. A finales de octubre, las Naciones Unidas seguían manteniendo una actitud discreta en la búsqueda de soluciones a un conflicto que amenazaba con desembocar de nuevo en guerra abierta.

El 1º de julio, la Sra. Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó una declaración en la que expresaba su preocupación por la vulneración de los derechos humanos de los eritreos que estaban siendo expulsados de Etiopía y pedía a los dos países que resolvieran el conflicto por medios pacíficos. Etiopía reaccionó con ira y exigió la rectificación inmediata de lo que consideraba una afirmación infundada que, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, era "de las que socavan la credibilidad de la Oficina de las Naciones Unidas".

Al contrario de lo que opina ese Ministerio, lo único que puede socavar la credibilidad de las Naciones Unidas es la falta de atención a las cuestiones de derechos humanos pese a los diversos grados y modalidades de intervención de la Organización en Etiopía. Altos funcionarios de las Naciones Unidas acudieron a menudo a Addis Abeba, que es además la sede de la OUA y de la Comisión Económica para África (CEPA). Etiopía fue el tercer receptor mundial de la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y uno de los cuatro beneficiarios más importantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en todo el mundo. A finales de abril, el Sr. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, se entrevistó con las autoridades etíopes y con funcionarios de la OUA para examinar las perspectivas de paz en el África oriental y central, y dijo que era moderadamente optimista respecto del fin de 10 años de conflictos en África y del surgimiento de una "nueva África" caracterizada por el empeño en "rechazar la violencia, abrazar la democracia, respetar los derechos humanos y fomentar la reforma económica". Dos semanas después de la gira del Secretario General, volvían a surgir conflictos gravísimos en el África oriental y central.